
Sergio Gómez Echenique ()*

*El rol del sector agrario
en la transición.
Análisis del caso chileno (**)*

INTRODUCCION

El objeto de este trabajo es analizar el rol que han jugado los diferentes grupos sociales ligados a la agricultura, así como el propio gobierno chileno, en la transición hacia la democracia. Para ello, se ha estimado necesario considerar, como punto de partida para el análisis, dos situaciones traumáticas y un temor siempre presente en la población chilena durante el proceso de transición. A saber:

a) Trauma 1. El proceso de reforma agraria y la movilización campesina que le acompañó, como uno de los factores desencadenantes de la quiebra institucional de 1973.

b) Trauma 2. La reacción de las organizaciones empresariales agrícolas contra las políticas de ajuste estructural que se implementaron durante el gobierno autoritario de Pinochet, particularmente entre 1976 y 1982, como un factor clave para explicar el cambio de dichas políticas.

c) Fantasma. El clima de desconfianza y de temor por parte de los agricultores sobre lo que podría acontecer en el

(*) Sociólogo, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile.

(**) Ponencia presentada en el Seminario Internacional «Políticas Agrarias y Grupos Sociales en procesos de Transición Democrática en Latinoamérica, España y Portugal», Córdoba, España, mayo de 1992.

campo chileno, ante la inminencia de la constitución de un gobierno presidido por Aylwin.

Lo anterior ayuda a explicar varias cosas:

— La moderación de las políticas del programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia.

— El tipo de autoridades nombradas en el Ministerio de Agricultura en el período de transición.

— Los sectores a los que han ido destinados los principales programas de actuación y los que han quedado fuera.

La hipótesis que intenta demostrar este artículo es que, en la transición chilena, se evitan referencias a los traumas del pasado y se privilegian los elementos consensuales.

Antes de comenzar con el análisis que me propongo abordar, conviene señalar que el tema de la transición se ha convertido en una materia recurrente en la política chilena de los últimos veinte años. Por ejemplo, en 1972, en pleno proceso de reforma agraria escribí un trabajo que tenía un título similar al actual (1) y en el cual se analizaban los problemas con los que se enfrentaba la agricultura chilena en el proceso de transición al socialismo. Ahora, en este trabajo, se trata el tema de la forma como la agricultura chilena —dentro de un sistema plenamente capitalista— se adapta a un proceso de transición desde un régimen político autoritario hacia uno democrático. La continuidad temática y la ruptura del contexto son, verdaderamente, signos de los tiempos de la historia política reciente del país.

Por otro lado, en un reciente trabajo, C. Kay (2) se propone «determinar el grado en que la política agraria aplicada en el proceso de transición democrática en Chile es conti-

(1) «El rol del sector agrícola y la estructura de clases», publicado en la Revista *Sociedad y Desarrollo* del Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO) de la Universidad de Chile nº 3, julio-septiembre de 1972, y el libro *Chile: Reforma Agraria y Gobierno Popular*, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1973.

(2) Ver Cristóbal Kay: «La política agraria del gobierno de Aylwin: continuidad o cambio», en *Comercio Exterior*, vol. 41, nº 10, México, octubre 1991, pág. 934 y siguientes.

nuación de la seguida por el régimen autoritario o si ha habido un cambio». Su respuesta es que la política es básicamente continuista, pero con un rostro más humano. En sus palabras, «la política agraria de Aylwin favorece la redistribución con crecimiento y se inclina por los campesinos» (pág. 940).

Además de esta constatación, cuyo contenido compartimos, en este trabajo trataremos de buscar las razones que la explican.

El trabajo ha sido dividido en siete secciones. En la primera, se muestra el efecto traumático que tuvo en vastos sectores del campo chileno la aplicación de la reforma agraria y las movilizaciones campesinas que la acompañaron. La segunda trata sobre los traumas que dejaron en amplios grupos de medianos y grandes agricultores la aplicación dogmática, durante el gobierno de Pinochet, de la política de ajuste estructural y que fue visualizada por ellos como una «segunda reforma agraria», realizada esta vez por el sistema bancario. La tercera relata la movilización de los empresarios agrícolas para lograr un cambio de dicha política, y el clima que vivió el sector empresarial rural en el ocaso del gobierno autoritario. La cuarta explica el contenido conservador del programa de gobierno de la Concertación y la razón de por qué los encargados de aplicarlo no tenían relación alguna con los políticos del pasado. En la quinta se evalúan los primeros meses del gobierno de la Concertación en el campo. Finalmente, se exponen los principales dilemas con los que se enfrenta el desarrollo del sector agrario chileno en el futuro inmediato.

LA DECADA 1964-1973. EL TRAUMA DE LA REFORMA AGRARIA

En esta sección se analizan algunos antecedentes para entender el efecto traumático que tuvo la reforma agraria en vastos sectores del campo. En esta ocasión no se hará un análisis

sobre el proceso de reforma con sus logros y dificultades (3), sino exclusivamente sobre la percepción negativa que tiene sobre el mismo un sector significativo de la sociedad rural chilena.

De cualquier forma, no hay que olvidar que dicho proceso tiene su origen más inmediato en la organización de sindicatos que se produjo en la mayoría de las haciendas agrícolas a comienzos de la década de los 60. Este hecho marcó una quiebra cultural de enorme significación que iba más allá del ámbito de las relaciones laborales, y así fue percibido por sus principales protagonistas. Los hacendados se refieren a ese momento como aquél en el que «se perdió la confianza», mientras los trabajadores lo visualizan como aquél en el que «nos pusimos pantalones largos», dando a entender la superación de las relaciones sociales paternalistas.

Se trata, en realidad, del comienzo del fin del orden tradicional en el campo.

También es necesario recordar el alto grado de consenso que se alcanzó, en la sociedad chilena en su conjunto, en torno a la necesidad de realizar una reforma agraria a comienzos de la década de los 60. No se trataba, por tanto, de una idea extraña o impuesta desde arriba o desde fuera del propio sector agrario.

(3) En otros trabajos he tratado el tema desde el punto de vista de los sectores que resultaron beneficiados por la reforma. Ver, por ejemplo:

— «Los campesinos «beneficiados» por la reforma agraria chilena. Antecedentes, diferenciación y percepción campesina». *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*, vol. 4, nº 1, Bogotá, 1980.

— Diferenciación social en el campo y sector reformado: una réplica. Artículo publicado en el *Boletín de Estudios Agrarios* del Grupo de Estudios Agrorregionales (GEA), nº 3, enero-junio, Santiago, 1979.

— *Reforma agraria y potenciales migrantes*. Documento de trabajo SC-100779-082, 176 págs. Síntesis de Informe de Investigación señalado en el número 23. Santiago, 1979.

— *Descomposición campesina. Análisis de los asignatarios de la reforma agraria*. Ponencia presentada al Seminario Economía Campesina y Empleo, PREALC, Santiago, diciembre de 1979, publicado en *Economía Campesina y Empleo*, PREALC-OIT, Santiago, 1981, y en la *Revista Paraguaya de Sociología*, año 17, nº 48, mayo-agosto, 1980.

— *Después del latifundio-minifundio. ¿Qué?*, Documento de trabajo nº 92, FLACSO, 1980, 16 págs. Ponencia presentada al V Congreso Mundial de Sociología Rural, México, 1980. También publicado como artículo en el *Boletín Reforma Agraria* de la Associação Brasileira da Reforma Agraria, vol. 11, nº 3, Sao Paulo, 1981.

Resulta necesario insistir en un par de hechos para situar el proceso de reforma agraria en una perspectiva adecuada. En primer lugar, la reforma tenía como objetivos: incorporar a la propiedad de la tierra a familias campesinas que vivían en latifundios atrasados y muchas veces abandonados; aumentar la productividad de la agricultura que hasta ese momento era extremadamente baja; e incorporar al sector campesino, hasta entonces marginado, a la comunidad nacional (4). Se trataba, por lo tanto, de un tipo de reforma moderada, si se la compara con los casos de México y Bolivia, y, como se señaló, contaba con un enorme consenso nacional. En segundo lugar, cuando se inicia la reforma, el empresariado agrícola no cuenta con la solidaridad del resto de las organizaciones empresariales del país. Más aún, sectores empresariales miraban con simpatía el hecho de que la reforma pudiera ampliar el mercado interno, al provocar una redistribución de ingresos en el campo. Esta situación cambia en 1969, cuando se produce la primera expropiación de un empresario agrícola eficiente. Hasta entonces, las expropiaciones se habían centrado fundamentalmente en predios de gestión ineficiente y cuya defensa resultaba difícil. La expropiación de este empresario eficiente selló la alianza de todos los sectores empresariales del país en franco rechazo a la reforma. En otras palabras, más que un rechazo a la idea de la reforma, lo que ocurrió fue un rechazo a la forma en que se estaba aplicando.

Hechas estas advertencias, se expondrán a continuación algunos elementos que permitan comprender la percepción que tienen aquellos sectores que, de un modo directo o indirecto, se vieron afectados por el proceso de reforma agraria.

Comenzaré señalando que los pequeños agricultores, junto con los asalariados eventuales, quedaron al margen de la reforma en tanto que afectados por ella. Quizás más precisamente habría que decir que se convirtieron en observadores de un proceso que no los afectaba directamente, pero sí de

(4) Ver Antonio Corbalán, «Reflexiones en torno a los Objetivos de la Reforma Agraria», en *Reforma Agraria Chilena: seis ensayos de interpretación*. ICIRA, Santiago, 1970.

forma indirecta, ya que muchos de ellos se beneficiaron de los procesos de adjudicación de tierras.

Es importante señalar, no obstante, que el conflicto social en el campo alcanzó a los propios grupos beneficiados por la reforma. Conforme pasó el tiempo, en la mayoría de las unidades reformadas se fue gestando un conflicto entre campesinos. Primero, entre los beneficiarios de las adjudicaciones de tierras y los trabajadores contratados por aquéllos. Luego, los conflictos se plantearon entre los propios adjudicatarios. La base de este último conflicto estaba en una anacrónica forma de organización del trabajo —similar al que tenía la hacienda— donde se remuneraba la fuerza de trabajo de forma igualitaria, al margen del esfuerzo o de la productividad. Sólo a mediados del gobierno de la Unidad Popular, se comenzó a aplicar un nuevo sistema de gestión predial, que, sin embargo, no pudo operar con la extensión y eficacia requeridas.

Este conflicto social entre grupos destinatarios de la reforma agraria estuvo atravesado por los conflictos entre campesinos afiliados a organizaciones sindicales partidarias y opositoras del gobierno de Unidad Popular, conflicto que provocó serias rupturas en la solidaridad interna de las comunidades campesinas. Esta situación se explica por la polarización social que vivió el país en los años 1972 y 1973.

Los sectores afectados por la reforma agraria

Aun cuando la reforma agraria se concentró, sobre todo, en los grandes predios, algunas de las expropiaciones que se realizaron entre los años 1971 y 1973 afectaron también a pequeños agricultores. Aproximadamente, un 6% de los predios expropiados (256 predios) —cifra cuantitativamente pequeña, pero cualitativamente expresiva— en este período correspondieron a predios menores de 20 HRB (5).

(5) HRB: Hectárea de Riego Básica, medida de equivalencia para tierras de diferentes calidades.

Si se analizan las ocupaciones de tierras de acuerdo con el tamaño de las fincas ocupadas, destaca el hecho de que de los 1.713 predios ocupados entre 1970 y 1972 —recurriéndose en muchos casos a la violencia física—, 211 fueron predios que pueden ser considerados como familiares y minifundios, lo que equivale al 12,2% del total, siendo las causas principales la recuperación de tierras y la existencia de problemas laborales (6).

Estos dos hechos: las expropiaciones y las ocupaciones de predios de pequeños agricultores —cuyo origen es externo al movimiento campesino—, resultaron decisivos para la percepción negativa que este colectivo tiene sobre la reforma agraria y para acentuar el carácter conservador que tradicionalmente ha tenido (7).

Para ilustrar la percepción traumática de los sectores afectados por la reforma agraria, se presentan tres puntos de vista:

- La visión que tiene un alto dirigente político de izquierda cuando hace una autocrítica sobre este proceso.
- La de un escritor progresista.
- La del Informe de Verdad y Reconciliación.

1) *Alto dirigente político de izquierda*

Este dirigente tiene una amplia trayectoria en la política chilena. Siguió las etapas que tuvieron los políticos exitosos en el pasado. Presidente de la principal federación de estudiantes universitarios del país, uno de los parlamentarios más jóvenes y brillantes de la década de los 60 y luego dirigente de un partido político radicalizado que salió del Partido De-

(6) Sergio Gómez: *Las organizaciones campesinas y empresariales, el conflicto social y el comportamiento electoral en el medio rural. Chile, 1970-1973*. México, 1975, no publicado.

(7) Sobre el comportamiento político conservador de los pequeños agricultores en Chile se puede consultar el trabajo anterior y el de Jorge Echenique y Nelson Rolando: *Elecciones 1989 en el campo*. AGRARIA, Santiago, 1991.

mócrata Cristiano. Dada esta trayectoria, su testimonio adquiere un valor especial.

«Con el tiempo, hemos terminado por descubrir la importancia de un punto que en el curso del proceso no le atribuimos: el agravio subjetivo que experimentaron determinadas personas por medidas que aunque considerábamos justas, afectaron, más allá del patrimonio, su identidad esencial.»

Este fue el caso, por ejemplo, de las expropiaciones de la reforma agraria, particularmente de aquéllas que fueron precedidas de una ocupación de los predios y donde la tierra estaba asociada a valores simbólicos y tenía profundas raíces afectivas. Perder una finca interrumpía la continuidad con la casa de sus antepasados y con tradiciones y recuerdos muy apreciados.

Frente a esta sensación, los argumentos técnicos basados en la mala explotación de la tierra o el razonamiento social de que era necesario transferirla a los campesinos, simplemente carecían de fuerza y valor. La sola decisión de la expropiación provocaba un profundo rencor que, en muchos casos, se mantiene vivo hasta hoy día, incluso en los descendientes de los afectados que no vivieron ese momento (8).

2) *Escritor progresista*

Un *novelista* chileno, progresista y lúcido, que fue diplomático chileno en La Habana y luego colaborador directo de Pablo Neruda en la embajada de París, se refiere al mismo tema en los siguientes términos:

«Siempre he pensado que la reforma agraria, cualquiera fuera su justificación social o económica, tocó aspectos excesivamente sensibles de la vida chilena. Siempre he observado con atención y hasta con fascinación a las familias relacionadas con la tierra. Las relaciones de las familias con el campo, con los fundos y sus historias, con las casas patronales y sus mitologías, no son comparables en absoluto con las del industrial con su fábrica o el pro-

(8) Luis Maira, *El ejército, la reconciliación y la historia*, Diario *La Epoca*, 4 de julio de 1990.

fesional con su oficina. Ahí intervienen tradiciones, apegos, emociones, instintos que no pueden reducirse a una pura cuestión de propiedad y de inventario.»

Las historias de propietarios agrícolas armados y convertidos en homicidas furibundos, en fieras humanas, son temibles y son, a la vez, por desgracia, coherentes. La Unidad Popular, con ingenuidad, con trágico simplismo, provocó reacciones que estaban adormecidas, pero que eran perfectamente previsibles.

Destruir el latifundio, por la vía rápida, sin destruir a la vez la convivencia pacífica entre los chilenos, era como encontrar la cuadratura del círculo (9).

3) *Informe de Verdad y Reconciliación*

Finalmente, el *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* (Informe Rettig), cuando analiza las condiciones que llevan a la polarización que antecede al golpe de Estado, señala los temores derivados de «repetidos atropellos al derecho de propiedad, en forma de ‘tomas’ (ocupaciones ilegales) de inmuebles agrícolas y urbanos y de empresas. En la mayor parte de esos casos, los dueños no fueron amparados en la restitución de su dominio, ni los hechos sancionados. Fue frecuente que las órdenes judiciales de restitución no recibieran cumplimiento por parte de las autoridades administrativas».

«En esas ‘tomas’, y en las ‘retomas’ correlativas —reocupaciones violentas que hacían los propietarios de sus bienes usurpados—, la fuerza armada de particulares pasó a sustituir, como un hecho usual e impune, a la fuerza pública de orden, la cual, a su vez, se vio administrativamente impedida de actuar en las ‘tomas’ y solió ser deliberadamente pasiva en las ‘retomas’.»

«Los acontecimientos recién descritos se multiplicaron progresivamente al avanzar la fase 1970-1973, creando un cuadro glo-

(9) Jorge Edwards, en artículo publicado en el diario *La Segunda*, julio de 1990.

bal de desorden y desconocimiento de los derechos de los particulares y de la función propia de la policía.»

«A menudo estos acontecimientos tuvieron, para ambos bandos, consecuencias de sangre: muertes homicidas, lesiones graves, suicidios; también hubo secuestros y vejaciones. Pero estos delitos tuvieron un tratamiento político antes que judicial...» (10).

Estos tres testimonios recogen la percepción y el significado desde el punto de vista de los sectores *afectados* por la reforma, aun cuando no son formulados por ellos mismos, con la distancia de casi dos décadas desde el momento en que los hechos ocurrieron. Lo que interesa dejar en claro es que los testimonios que hemos presentado no corresponden a personas directamente afectadas por la reforma. Tampoco se ubican dentro del espectro político de los opositores a dicho proceso. Se trata, más bien, de tres opiniones que se ubican dentro de posiciones políticas progresistas que, compartiendo los principios que inspiraron la idea de justicia social en el campo, son críticos sobre la forma en que esta política fue aplicada.

En resumen, uno de los elementos que surge con fuerza explicativa sobre las etapas posteriores, es la percepción negativa que un amplio sector de la sociedad rural chilena tiene sobre el proceso de reforma agraria.

La reforma agraria es, aún en la actualidad, un tema tan traumático para la derecha como lo es el de los derechos humanos para la izquierda. Ambos tocan valores muy centrales para cada uno de ellos.

Una de las pruebas de este trauma es la virtual imposibilidad, que persiste hasta la actualidad, de realizar un análisis relativamente sereno sobre la reforma agraria. Cuando este tema es tratado, las pasiones priman sobre las razones.

LA DECADA 1973-1982. EL TRAUMA DE LAS POLITICAS DE AJUSTE

En esta sección se exponen algunos antecedentes sobre

(10) Informe Rettig, tomo I, Santiago, 1991, págs. 35 y 36.

las dificultades de los sectores empresariales para adaptarse al ajuste estructural del sector agrícola chileno.

En otras oportunidades hemos analizado el carácter excluyente que tuvo la política agraria para la pequeña agricultura y los asalariados del campo (11). No se insistirá en ello en este artículo y sólo se tratará el caso de los empresarios.

Para comenzar, vale la pena recordar la verdadera historia de la aplicación de la política agraria durante el régimen militar, ya que se puede pensar que esta política fue la misma en todo el período y que contó —desde siempre— con el beneplácito del sector empresarial. Vayamos por partes.

Aunque para algunos resulte extraño, los conflictos entre las organizaciones empresariales agrícolas y el gobierno militar fueron una constante durante los primeros diez años, vale decir hasta 1983. Ello ocurrió en la medida en que éste avanzaba en la aplicación de un modelo económico que pretendía disciplinar al sector dentro de una política económica ortodoxa.

En ese período, los empresarios agrícolas contaron con aliados y opositores. Así, por ejemplo, el influyente diario *El Mercurio*, decano de la prensa en Chile, estuvo en diferentes momentos a favor y en contra de los agricultores.

Examinemos un editorial de 1976 en el que comenta la «*Difícil tarea del agricultor chileno*» a raíz de los problemas que afectaban a los agricultores por aquella época:

(11) Al respecto se puede consultar:

— *La Organización Campesina y la Reforma Agraria en Chile 1965-1977*. Artículo publicado en el *Boletín de Estudios Agrarios* del Grupo de Estudios Agrorregionales (GEA), n° 2, Santiago, octubre-diciembre 1978.

— *Transformaciones de un área de minifundio, Valle de Putaendo, 1960-1980*. Informe de Investigación. Documento de trabajo FLACSO n° 106, 241 págs. Santiago, 1981.

— *Instituciones y procesos agrarios en Chile*. Ediciones FLACSO. 167 págs. Santiago, 1982.

— *La organización campesina en Chile. Trayectoria y perspectivas*. Documento de trabajo FLACSO, Santiago, 1986. También publicado como Documento de trabajo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Santiago, 1986.

— *Trabajadores temporeros en la agricultura moderna de Chile central*. Documento de trabajo FLACSO, n° 14, diciembre de 1986.

«La agricultura no necesita de favoritismo, pero necesita, en cambio, un trato que considere en forma realista sus peculiares condiciones.»

«La agricultura ha debido soportar todo eso (se refiere a decenios de política errónea: la reforma agraria y, posteriormente, la revolución agraria, plagas y enfermedades, etc.) *junto con afrontar la experiencia de una economía social de mercado aplicada con un rigor no frecuente en economías más desarrolladas y liberales que la nuestra.*»

«El agricultor, sometido a rudos tratamientos económicos, políticos y sociales por varios años, no siempre obtiene el precio justo por sus cosechas y debe pagar elevados intereses...».

«Es difícil la tarea del agricultor chileno. Parece conveniente examinarla desde este punto de vista y concebir una política, no de favor, pero sí de justicia a su respecto.»

Sin embargo, señalaba que:

«Existen ciertas formas de comportamiento empresarial que son completamente inadecuadas para el correcto desarrollo de una economía social de mercado.»

«Es común escuchar peticiones de protección para determinados sectores de la producción. Se dice que es necesario tener créditos de «fomento» queriendo obviamente significar tasas de interés subsidiadas. También se habla de incentivos a la producción por la vía de exenciones tributarias. Se plantea usando el lenguaje de la Unidad Popular que algunas actividades son estratégicas y que, por tanto, deberían tener subsidios o protecciones...»

«La satisfacción de las peticiones de carácter estatista de los empresarios privados llevaría nuevamente al país al socialismo, con lo que los buenos propósitos de la actividad privada se convertirían en resultados claramente adversos a la misma.»

«Al no otorgarse protección se facilita un crecimiento acelerado, el desarrollo de la exportación y niveles de empleo más altos. Pero, principalmente, se asegura la legitimidad del sector privado y se eliminan prácticas socialistas que, a la larga o a la corta, terminan en convertirse en nuevos intentos expropiatorios, nuevas reformas agrarias y fortalecimiento de la actividad estatal que terminará por liquidar la actividad privada y, con ello, al país.»

Posteriormente, en el caso del conflicto de la leche de

1977, un conflicto clímax entre el gobierno militar y las organizaciones empresariales agrícolas, los agricultores contaron con detractores y con aliados para su causa. Recordemos que frente a la protesta por un problema del subsidio a la leche importada, un asesor del ministro de Economía expresó la histórica frase: «que se coman las vacas», es decir, que si los agricultores no eran capaces de producir leche con eficiencia, era mejor que liquidaran las vacas.

Veamos algunas declaraciones complementarias. Por ejemplo, las del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA): «Lo más grave que tiene la agricultura, en estos momentos, es la pérdida de alternativas. Hoy con la falta de alternativas, sólo un loco podría invertir en tierras (...) (es necesario) definir con honestidad lo que interesa a Chile. Si se está abierto a toda la producción que pueda haber en cualquier parte del globo, la que pueda ser más barata, no cabe ninguna alternativa agrícola en el país... salvo pequeños sectores que no alcanzan a ser el uno por ciento de la producción nacional y que son frutales con microclimas especiales».

Un representante del equipo económico del gobierno comentó los hechos en términos tales que radicalizó el conflicto. Dijo a los agricultores que «no pueden pretender utilidades a costa de empobrecer artificialmente a los consumidores y (que debían) sentir, por lo menos, un poco de vergüenza cada vez que piden un impuesto a los importadores».

Esta declaración, considerada oficial, sería la que llevó a un dirigente de los agricultores a replicarle «... no hay madre en este país que haya parido al h... que me venga a decir a mí sinvergüenza». También formuló algunas preguntas: «¿Y quién cresta va a responder en este país cuando nos demos cuenta del error? ¿Son imbéciles los europeos o los norteamericanos por proteger a sus productores (lecheros) o somos nosotros los... huemules?».

Diferentes dirigentes políticos comentaron este conflicto. Un importante dirigente político nacionalista escribió: «Si se sigue el consejo de un asesor económico ministerial y los

agricultores se 'comen las vacas' es bien poco lo que el país podrá progresar en el futuro. En suma, el modelo económico emergente es malo y mantendrá al país en un subdesarrollo que paralelamente intensificará las contiendas sociales, arrasrándonos, en definitiva, a un retroceso político que nos colocará en el mismo punto del cual fuimos rescatados por las Fuerzas Armadas».

Por su parte, un dirigente de los empresarios industriales aprovechó la ocasión para formular críticas hacia el comportamiento de las organizaciones patronales durante el gobierno militar: «... esta polémica de la leche, además de abrir una indiscreta cortina sobre el drama del productor chileno, desnuda también una tragedia política. Los organismos representativos de las actividades productivas empiezan, demasiado tarde, por cierto, a darse cuenta a qué posiciones imposibles las ha conducido su apoyo obscuro, irrestricto e indiscriminado a la política económica oficial. Con una miopía simplemente suicida, aceptaron transformarse de dirigentes gremiales en simples altoparlantes de una política que, en unos pocos años, ha deshecho la base económica de los sectores que representan. Como consecuencia de ello, han pagado el precio de una atroz pérdida de representatividad, cosechando apenas el despectivo distanciamiento que siempre tiene la omnipotencia para quienes han dejado de ser útiles». Y concluye: «Ambos dramas, además, el económico y el político, están magistralmente sintetizados en esta frase que ingresará en la antología de los juicios célebres de ese período: 'que se coman las vacas'».

Otro entrevistado, defensor de la política económica, se refería al agricultor chileno en los siguientes términos: «Por tradición ha sido conservador y mantiene algunas malas costumbres derivadas de políticas paternalistas». Y luego amenazaba: «si el agricultor se aferra al gobierno para solucionar sus problemas, éste tendrá perfecto derecho a intervenir en sus campos, volviendo a situaciones superadas».

En resumen, cada vez que los agricultores solicitaban un tratamiento especial para su actividad, eran objeto de críticas. Además, en la medida en que el endeudamiento del sector era creciente y los bancos comenzaban a rematar predios para cancelar las deudas, varios dirigentes plantearon que: «esto no es más que una segunda reforma agraria» (12).

LAS MOVILIZACIONES EMPRESARIALES Y EL CAMBIO DE POLÍTICA EN 1983

En primer lugar, hay que señalar que, durante los años 1980-1982, el tema de la crisis agrícola estuvo presente de forma reiterada. También, en este período, el enfrentamiento entre los dirigentes de las organizaciones empresariales se agudizó. Al respecto cabe recordar el intercambio de cartas entre el presidente de la SNA y de la Confederación de Productores Agrícolas (CPA) en mayo y junio de 1979. En una de ellas, el presidente de la CPA le recuerda al de la SNA que el proceso se inició el 11 de septiembre de 1973 y que «no se hizo para que jóvenes investigadores de la economía comprobaran sus hipótesis...».

A fines de agosto de 1981 se celebró en Viña del Mar un encuentro bajo el título de «Jornadas de Análisis de la Política Económica y Social y sus Efectos en la Transformación de la Agricultura». Lo importante de este encuentro es que se logra llegar a un planteamiento de consenso sobre los problemas de la agricultura chilena.

El otro aspecto que hay que destacar de dichas jornadas es el método que se emplea para que estos planteamientos unánimes del sector empresarial logren legitimidad ante el gobierno militar. Se acuerda, en coordinación con éste, la contratación de un *experto extranjero* para que realice un diagnóstico de la realidad del campo, sus perspectivas y so-

(12) Ver *Revista del Campo Sureño*, Temuco, 9 de mayo de 1988. El subrayado es nuestro.

luciones. Esta pintoresca decisión fue debidamente justificada por el propio Pinochet. Al respecto planteó: «puede ser una persona extranjera, no puede ser chilena, ya que el agricultor, ligerito se pone la camiseta de la agricultura..., o bien los políticos, que siempre andan buscando la oportunidad para crear problemas... Por eso creo que la persona que nos venga a marcar el rumbo a seguir en la agricultura tiene que ser un extranjero y estoy meditando para decidir aquélla que los agricultores me señalen tal como se diagnostica en medicina».

En enero de 1982 se contrató a los expertos norteamericanos Clifford Hardin y Clarence Palmby, quienes visitaron durante 11 días el país y elaboraron el documento que se ha conocido como el *Informe Hardin*, y que avalaba, en lo fundamental, las reivindicaciones de los agricultores.

Resumiendo la trayectoria de la demanda empresarial: en el encuentro de Viña del Mar, la SNA acoge las tradicionales posiciones de la CPA y, a través del *Informe Hardin*, logran legitimidad frente al gobierno.

Durante 1982 se agravan los problemas que aquejan a los agricultores, sobre todo los que se dedican a los cultivos tradicionales, entre los que se encuentran, mayoritariamente, los de la zona sur.

En los meses de noviembre y diciembre de 1982 se producen importantes movilizaciones empresariales en la zona sur del país. Estas se caracterizan por el alcance regional, por el amplio apoyo social que logran (agricultores, transportistas, empresarios industriales), por el apoyo que reciben de los medios de comunicación regional y por el carácter eminentemente movilizador que tienen (impedir remates, movilizaciones contra los bancos, etc.). La reunión culmina con una declaración suscrita por todas las organizaciones en la que se exige solución al problema de la deuda bancaria, tributaria y previsional, y la suspensión de los remates, reivindicando un programa de recuperación.

Luego, cuando los agricultores se preparaban para iniciar

su reunión en un recinto que pertenecía a organizaciones empresariales regionales, con el respaldo de importantes organizaciones gremiales de carácter nacional, la autoridad administrativa negó el permiso, y, mediante el uso de la fuerza pública, fueron violentamente reprimidos y 19 dirigentes empresariales detenidos. El dirigente empresarial de la movilización fue encarcelado, trasladado a Santiago y luego *expulsado* del país.

Finalmente, la cosecha de la temporada 1982-1983 resultó desastrosa, al punto de ser la más baja de este siglo. Por otro lado, la situación de la economía del país, especialmente la falta de divisas, impedía que se pudiera seguir importando productos agropecuarios que podían ser obtenidos en el país.

Estos dos hechos se convirtieron en los *factores desencadenantes* del cambio en la política económica del gobierno en 1983.

La nueva política consistió en establecer bandas de precios con el fin de dar estabilidad, sobretasas arancelarias para neutralizar los subsidios aplicados en los países de origen y derechos específicos para encarecer la importación de algunos productos. También se estableció un crédito cerealero, se renegociaron las deudas y se estableció una política de comercialización para ciertos productos.

Los productos nacionales beneficiados fueron: el trigo, la remolacha azucarera, los productos lácteos, el aceite comestible y, en parte, la carne. Además, en forma indirecta, en la medida que se mantenía un dólar alto, se encarecieron todos los productos importados, protegiendo al sector agrícola en su conjunto. Este último aspecto fue crucial en la nueva política.

Las consecuencias de este paquete de políticas fueron claras: aumento de los volúmenes de producción, tanto por una mayor superficie sembrada, como por la elevación en los rendimientos; crecimiento del empleo en el campo, y un significativo ahorro de divisas.

En todo ese contexto convendría reflexionar sobre la paradoja que significa la amenaza reiterada que reciben los agricultores y sus organizaciones cada vez que solicitan alguna política que implica un tratamiento especial para el sector. Invariablemente sufren la amenaza —desde la derecha— del ámbito político y más específicamente desde el diario *El Mercurio*, de que la reforma agraria volverá a ser aplicada si los agricultores insisten en pedir un trato preferencial.

Además de la ausencia de lógica entre una proposición y la otra, porque no se ve dónde puede estar la relación entre causa y efecto, llama la atención que sea una entidad como el diario *El Mercurio* la que formule este tipo de planteamientos en una época en que vastos sectores del centro y de la izquierda del espectro político no destacan el tema de la reforma agraria como una cuestión vigente en la actualidad. Más bien, el planteamiento de estos sectores es que la reforma agraria es una realidad superada, en el sentido de que fue un proceso ya realizado (y abortado). Los desafíos con los que se enfrenta en la actualidad la agricultura chilena son absolutamente diferentes.

Una posible razón de esta reiterada amenaza podría ser el hecho de que, frente a la ausencia de argumentos sustentados en la realidad y en la lógica, para el mantenimiento de un determinado modelo se recurre a un tema que, para los agricultores y para otros sectores, es un fantasma que los traumatiza. Ante este tema no existen condiciones para realizar un análisis racional. El tema de la reforma agraria, por el hecho de haber afectado muy directamente al patrimonio, viejas tradiciones, valores, relaciones personales, etc., no puede ser tratado de una manera racional con quienes fueron directamente tocados por ella.

En resumen, en la actualidad, amenazar a los agricultores con una nueva reforma agraria es simplemente tocarles la fibra más sensible frente a la cual no tienen capacidad analítica para responder. Se trata, simplemente, de intimidarlos con un fantasma.

Luego de un comportamiento productivo errático del sector en los primeros años del gobierno militar, se culmina con la crisis de los años 1982-1983 ya comentada. Los últimos años del gobierno militar y los primeros de la concertación muestran un agotamiento del modelo, luego de cinco años de crecimiento y un comportamiento impecable del sector como lo reflejan las siguientes cifras.

Tasa de crecimiento del sector agrícola

Año	Porcentaje
1981	2,7
1982	—2,1
1983	—3,6
1984	7,1
1985	5,6
1986	8,7
1987	4,5
1988	4,7
1989	3,1
1990	2,1

Fuente: Banco Central de Chile en Jorge Echenique, *Las Políticas Agrícolas en el Marco del Ajuste: El caso de Chile*. Agraria, 1991.

Además, el período inmediatamente anterior al final del gobierno autoritario está marcado por:

— Un dinamismo que se acaba para la producción destinada al mercado interno, ya que desaparece el factor dinamizador: la sustitución de importaciones de estos productos.

— Problemas en el mercado externo. Las crisis derivadas de las uvas envenenadas y la aparición de la mosca de la fruta habían dejado al descubierto la extrema debilidad del modelo.

— La demanda de reforma agraria por parte de los dirigentes campesinos, argumentando que se trataba de un proceso interrumpido por el golpe de Estado de 1973 y que debía ser concluido. En 1987 se desarrolló un agrio debate sobre el particular. Ello motivó reacciones como la que se

transcribe a continuación: «El tema de la reforma agraria, que todos creíamos agotado y archivado, vuelve a salir a flote. Las reacciones públicas me hacen pensar que continuamos anclados en un estado de susceptibilidad, irritabilidad, de intolerancia francamente delirantes. Observo con pesimismo el debate, la virulencia de las declaraciones...» (13).

Desde otro punto de vista, un dirigente político de derecha señaló que:

«En última instancia, la reforma agraria que algunos inconscientes están defendiendo para reeditarla, es la causante directa del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973» (14).

En resumen, el contexto en que ocurre el cambio de gobierno está marcado por los siguientes factores: la presencia de los traumas anteriores, un dinamismo que muestra señales de agotamiento, una persistencia de amenazas hacia los agricultores por parte de economistas del gobierno militar, y el arrastre de problemas que no se solucionan (endeudamiento).

EL PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA CONCERTACION DE LOS PARTIDOS PARA LA DEMOCRACIA

A continuación se argumenta sobre las razones que explican el carácter marcadamente conservador del programa de la Concertación y el tipo de autoridades que son nombradas en los cargos claves del Ministerio de Agricultura.

Al igual que, en el decenio 1964-1973, la idea fuerza que orientó la mayoría de los programas destinados al sector rural fue la reforma agraria, en la década del 90 el tema sustantivo que marca las prioridades acerca de las tareas que hay que realizar en el campo, se refiere a mantener el dinamismo del sector empresarial de la agricultura —especialmente el vin-

(13) Jorge Edwards, diario *La Epoca*, 2 de agosto de 1987.

(14) Eduardo Boetsch, *El Mercurio*, 2 de agosto de 1987.

culado al mercado externo— y dar un apoyo firme a la pequeña agricultura.

El alto grado de consenso existente en el contexto de transición democrática explica la razón de por qué abordar la situación de los trabajadores temporales de la agricultura, tema que tiene tanta o más urgencia que la situación de los agricultores, no llegue a constituirse en una política importante para el gobierno, y de que sí lo sea, en cambio, el mantenimiento del dinamismo del sector moderno de la agricultura.

La diferencia básica radica en el hecho de que, mientras el tema de los asalariados temporales es altamente conflictivo, el de superar la postergación de los campesinos y mantener el dinamismo del sector empresarial, no lo es. En otras palabras, la razón de fondo que explica la prioridad en el apoyo hacia esas políticas se encuentra en el hecho de que la sociedad chilena, luego de un prolongado período de enfrentamientos, valora y busca políticas consensuadas.

No es un azar que *todas* las principales autoridades del Ministerio de Agricultura sean personas que no se encontraban vinculadas con el proceso de reforma agraria. De partida, el ministro Figueroa es un prestigioso abogado, director de varias empresas importantes y agricultor del sur. El subsecretario Cox es agrónomo y economista agrario, con un perfil básicamente académico, que en la época de la reforma agraria se encontraba vinculado a la realización de estudios y al tema del comercio exterior. El director nacional del INDAP fue, primero, director regional de dicho instituto y, luego, académico universitario. Los directores de los otros servicios importantes, como el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, también se encuentran dirigidas por profesionales que no ocuparon cargos claves en el proceso de reforma agraria.

Tampoco se debe al azar que ni las políticas que plantean el funcionamiento del Programa del Fondo Nacional de Tierras ni los de la sindicalización de los temporeros hayan sido

aplicadas (15). Ambas se encuentran en el programa de gobierno, pero dado el carácter conflictivo de las mismas, han sido dejadas de lado. En cambio, los programas más importantes son los de crédito y de transferencia tecnológica hacia los pequeños agricultores, el carácter consensual que tienen.

LOS PRIMEROS DOS AÑOS DE GOBIERNO DE TRANSICION

Como se ha señalado, el sector mostró una notable recuperación luego de la brutal caída que tuvo en la temporada agrícola 1982-1983, creciendo a tasas del orden del 7% anual hasta el año 1986-1987. Desde entonces, el crecimiento se ha desacelerado, aun cuando hay diferencias en el comportamiento en los diferentes subsectores como son, la fruticultura, los cultivos anuales, el sector forestal, etc. Con todo, el nuevo gobierno se encontró con un sector que venía perdiendo dinamismo debido a dos problemas fundamentales: una pesada deuda acumulada y dificultades en el mercado.

El presidente de la SNA calificó el año 1990 como un año malo con crecimiento cero. *La Revista del Campo*, del diario conservador *El Mercurio*, fue más cautelosa. Dice: «A pesar de la persistencia de factores internos y externos negativos, el sector silvoagropecuario salvó con éxito el año calendario» (*Revista del Campo*, 31 de diciembre 1990).

Pensamos que los primeros dos años de gobierno registran una serie de hechos que marcan una transición promisoriosa en un sector sobre el cual se proyectaban sombras de todo tipo.

Frente al problema de la deuda, el ministro de Agricultura

(15) El primero se refiere a la creación de un mercado de tierras al que podrían tener acceso sectores minifundistas con plazos amplios y tasas de créditos subsidiados. El segundo tiene que ver con la proposición de normas legales para facilitar la organización sindical de los temporeros y la posibilidad de que este sector pueda realizar negociaciones colectivas.

y el presidente de la República han insistido públicamente en que los bancos deben ceder para buscar solución a este problema. Qué más podría hacer un gobierno que ante cualquier iniciativa es tildado de *estatista*. Para abordar los problemas de la fruta chilena en el mercado externo el gobierno ha propuesto diversas medidas para lograr un efectivo control de calidad, todas las cuales han sido rechazadas por los empresarios, acusándolo precisamente de «estatista». Desgraciadamente, tendrán que surgir problemas mayores para que se entienda la necesidad de establecer controles obligatorios para la fruta que sale al extranjero.

En el caso de los problemas del mercado interno, el gobierno Aylwin encontró una situación caótica en la comercialización del trigo, consiguiendo ordenarla al final de la cosecha. Finalmente, COTRISA ha dado a conocer el precio del trigo para esta temporada —cuestión que fue debidamente anunciada antes de las siembras— y las organizaciones empresariales se han manifestado de acuerdo. Este es un hecho que no tiene precedentes, por lo menos en los últimos 30 años. Al contrario, siempre se oponían al precio que fijaban los diversos gobiernos y sólo variaban en el tono de la queja y en los métodos de la protesta. La temporada 1990-1991 se logra, sin embargo, un *acuerdo* en torno al precio del trigo, asunto que es de la máxima importancia.

Los programas de atención a la pequeña agricultura se han ampliado y en su implementación se ha incorporado a diversas organizaciones no gubernamentales con amplia experiencia en la materia y a las cooperativas campesinas.

Ahora bien, si consideramos las relaciones entre las organizaciones sociales representativas y el gobierno, el balance es agrídulce.

Las predicciones iniciales sobre las relaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el gobierno señalaban que tales relaciones serían difíciles. Estas, efectivamente, comenzaron complicadas y llegaron a su clímax de hostilidad en el Primer Encuentro Nacional Agrícola, organizado a ini-

ciativa de la SNA, en el que participaron 400 delegados, y que pudo transformarse en un enfrentamiento entre el sector empresarial y el gobierno. Sin embargo, ello no fue así, y al término del año 1990 las relaciones entre el gobierno y las diferentes organizaciones empresariales eran ya de completa normalidad. El único incidente ha sido la reacción negativa de los empresarios ante los acuerdos de integración comercial que el gobierno ha impulsado, sobre todo con Argentina y también con México y con los Estados Unidos.

Por otra parte, la constitución de nuevas organizaciones representativas de los empresarios es un hecho interesante que ocurrió en 1990. En el transcurso de ese año se formó una Asociación de Agricultores del Centro, y a mediados de diciembre se constituyó el Consejo Nacional del Agro, que agrupa a 36 organizaciones agrícolas del país. Además de celebrar la constitución de organizaciones que fortalecen la estructura social en el campo, *ambos hechos* son una muestra de la pérdida de hegemonía de representación que tiene la tradicional SNA.

Por su parte, las organizaciones campesinas han vuelto a tener abiertas las puertas del Ministerio de Agricultura. Existen reuniones periódicas entre los dirigentes y las autoridades del Ministerio, donde se tratan los problemas de sus organizaciones y se buscan soluciones.

Con referencia a la organización sindical de los asalariados agrícolas, se ha avanzado muy poco. De hecho, la mayoría de la fuerza de trabajo asalariada del campo, los temporeros, no tienen condiciones de organizarse ni menos de negociar colectivamente. Los dirigentes sindicales han realizado esfuerzos por adecuarse a las nuevas condiciones, pero sin mucho éxito.

El ministro de Agricultura, al hacer un balance de los dos años del Gobierno de la Concertación (1990-1991), señaló el aspecto más positivo y el más negativo (16). El negativo es

(16) Ver diario *El Mercurio*, 12 de marzo de 1992.

«la fragilidad del país desde el punto de vista productivo, (debido) a la aparición de desastres, plagas y enfermedades»; lo positivo es «la confianza de los agentes económicos de los sectores agrícola y forestal en el crecimiento del país, lo que se reflejó en un constante aumento de la inversión y de la producción».

Los dirigentes empresariales, por su parte, se quejan de la baja rentabilidad del negocio agrícola, entre otras razones por la constante devaluación del dólar. Según el presidente de la SNA, resulta lamentable que, en el contexto de un marco económico positivo, la agricultura se haya quedado con un crecimiento bajo. También «sostiene que el ánimo de los agricultores está malo y que se debe hacer una gran cruzada nacional, pública y privada, para reactivar el sector» (17). Finalmente, los dirigentes campesinos, sean representantes de los pequeños propietarios o de los asalariados, protestan por la extrema debilidad en que se encuentran sus organizaciones representativas y la indiferencia que muestra el gobierno frente a esta realidad.

PRINCIPALES DILEMAS

Para terminar este artículo interesa llamar la atención sobre tres aspectos que tendrán importancia en el comportamiento del sector agropecuario en la transición hacia una democracia estable.

El *primer* problema se refiere a un secreto a voces que se mantiene en Chile: se trata de la grave situación con la que se enfrentan la mayoría de los trabajadores asalariados temporeros en sus condiciones de trabajo y salarios. Se está frente a una situación que se puede volver explosiva en el momento que menos se piense. Más vale prevenir, y las organizaciones campesinas han dado suficientes muestras de madurez. Fal-

(17) Ver revista *El Tattersal*, n° 80, marzo de 1992, pág. 10.

tan signos positivos por parte de los empresarios y de las autoridades para encarar este problema.

El *segundo* se refiere a la necesidad de mantener la capacidad exportadora silvoagropecuaria plenamente vigente a través de su presencia en los mercados externos. Este no es un dato de la realidad, sino un desafío que, en la medida que pase el tiempo, será cada vez más exigente. Hay que tener en cuenta que Chile fue de los primeros países en desarrollar, dentro de América Latina, un sector hortofrutícola —con productos iguales a los que producen los países del norte, pero fuera de temporada— vigoroso. No se trata, entonces, de producciones exóticas, tropicales, por ejemplo, ya tradicionales en los hábitos de consumo de esos mercados, sino de las llamadas *winter fruit*, que permiten a esos consumidores disfrutar de su fruta habitual durante el año corrido.

El éxito que ha logrado Chile en este campo ha llevado que otros países, con condiciones agroclimáticas similares, sigan sus pasos y que terminen por convertirse en potenciales competidores de los mismos mercados y productos.

En el caso de Brasil, existen ambiciosos planes de desarrollo frutícola (18). La tesis central es que si Chile tiene logros con una superficie plantada de 150.000 hectáreas, cuánto podrían llegar a exportar los brasileños si disponen, sólo en el valle de San Francisco, en el nordeste, de 600.000 hectáreas regadas...

El caso de Brasil no es único y hay otros países que están desarrollando una estrategia similar a la chilena. Argentina, por ejemplo, se encuentra en proceso de reconvertir 150.000 hectáreas de viñedos en uva de mesa y se encuentra plantando adicionalmente otras 45.000 hectáreas. Chile, como

(18) Ver el libro *Frutas brasileñas, exportação* (351 págs.) editado por organismos dependientes de los Ministerios de Agricultura y de Hacienda del Brasil, editado en 1989, en el cual se exponen las potencialidades de la exportación de frutas y de hortalizas de Brasil *siguiendo* el ejemplo de Chile.

país, ya no se encuentra solo en esta estrategia y, por lo tanto, debe mejorar su desarrollo como país exportador.

El *tercero* es la necesidad de establecer una política de concertación entre todos los sectores directamente involucrados, es decir, empresarios, trabajadores y el gobierno. La concertación de los empresarios con el gobierno se debería expresar en un acuerdo nacional sobre los controles de la calidad de la fruta que se exporta. Hasta ahora ha primado un exagerado ideologismo que no conduce a garantizar, en el medio plazo, esta actividad. La concertación con los asalariados debe consistir en una digna retribución a la fuerza de trabajo, tanto en los niveles salariales, como en las condiciones en que se realizan las faenas agrícolas.

La respuesta favorable a la necesidad de establecer una verdadera concertación es una garantía para viabilizar el modelo de desarrollo agropecuario en el mediano plazo y asegurar un rol positivo del sector agropecuario en la transición hacia la democracia en Chile.

BIBLIOGRAFIA

- MAXIMILIANO COX, ALBERTO NIÑO DE ZEPEDA y ALVARO ROJAS (1989): *Política Agraria en Chile. Del crecimiento excluyente al desarrollo equitativo*. CEDRA, Santiago de Chile.
- LUIS GALEANO (compilador) (1990): *Procesos Agrarios y Democracia en Paraguay y América Latina*. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción.
- SERGIO GÓMEZ y JORGE ECHENIQUE (1991): *La agricultura chilena: las dos caras de la modernización*. FLACSO AGRARIA, Santiago, Tercera edición.
- DAVID E. HOJMAN (Ed.) (1990): *Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile*. Latin American Studies Series, MacMillan, London.
- CISTOBAL KAY (1991): *La política agrícola del gobierno de Aylwin: continuidad o cambio?* En *Revista Comercio Exterior*, vol. 41, nº 10, México, octubre.

EMILIANO ORTEGA (1987): *Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión*. CIEPLAN, Santiago.

PATRICIO SILVA (1990): *Agrarian Change under the Chilean Military Government*. *Latin American Research Review*, volume XXV, nuber 1.

RESUMEN

Para comprender el comportamiento del sector agrícola chileno, se comienza por echar una mirada sobre el proceso de reforma agraria (1964-1973), la contrarreforma posterior (1973-1982) y la modernización forzada y parcial que emerge en el sector agropecuario desde 1983 en adelante; recogiendo la percepción que tienen sobre los hechos los principales actores sociales involucrados.

Se plantea que las políticas que actualmente se formulan y aplican en el sector agropecuario en Chile, se encuentran fuertemente afectadas por la percepción que existe en amplios sectores de la población sobre los acontecimientos que ocurrieron tanto en el periodo de la Unidad Popular como durante el gobierno autoritario.

RÉSUMÉ

Pour comprendre le comportement du secteur agricole chilien, dans ce travail il est étudié le processus de réforme agraire (1964-1973), la contre-réforme ultérieure (1973-1982) et la modernisation forcée et partielle appliquée au secteur agricole à partir de 1983. Il y est également recueilli le point de vue des principaux secteurs sociaux concernés.

D'après cette étude, les politiques conçues et mises en oeuvre dans le secteur agricole au Chili se trouvent profondément affectées par la perception que de vastes secteurs de la population ont des événements qui se sont déroulés aussi bien au long de la période d'Unité Populaire que pendant le gouvernement autoritaire.

SUMMARY

To understand trends in the Chilean agricultural sector, an overview is first offered on the process of agrarian reform (1964-1973), the subsequent counter-reform (1973-1982), and the forced, partial modernization that has been emerging in agriculture since 1983, with the perceptions of the main sectors of society involved being taken into account.

The view is advanced that the policies currently being formulated and applied in Chilean agriculture are strongly influenced by the perception held by many sectors of the population of the events that occurred both in the Unidad Popular period and under the authoritarian government.

Palabras clave: Modernización, Reforma agraria, Transición política, Chile.